



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen Jurídico

Número:

Referencia: EX-2018-00647608-APN-SIGEN

SEÑOR SUBSECRETARIO DE ASUNTOS LEGALES:

- I -

Se somete a consideración y análisis de esta Dirección General un proyecto de Decreto (IF-2018-30235994-APN-DGAJ#MTR, vinculado en el Orden 83), a través del cual se aprueba el Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscripto por el MINISTERIO DE TRANSPORTE y Autopistas del Sol Sociedad Anónima, el cual formará parte integrante de la medida en trámite (artículo 1°).

- II -

ANTECEDENTES E INTERVENCIONES

Al respecto, se destaca lo siguiente:

Orden N° 2: Acta Complementaria del Acta Acuerdo sobre Inicio de Trámite de Aprobación del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte, del 20 de octubre de 2017, por medio de la cual se dejó incorporado el Anexo XII a los ejemplares del Acuerdo Integral que se adjuntaron al Acta acuerdo del 18 de agosto de 2017.

Orden N° 4: Dictamen de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN del 21 de diciembre de 2017, en el cual, en el marco del proceso de renegociación del Contrato de Concesión que vincula al Estado Nacional con la empresa Autopistas del Sol Sociedad Anónima, concluyó que resulta jurídicamente viable la prosecución del trámite de aprobación del acuerdo alcanzado entre el Estado Nacional y la concesionaria, con las recomendaciones y salvedades allí expuestas.

Orden N° 5: Informe de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (desde aquí, OA), en el que –con relación a la “Declaración Jurada de Intereses” en los términos del Decreto N° 202/17 con manifestación de vínculo positivo presentada por AUSOL- se consideró que “...correspondería la abstención del funcionario –en este caso, el Presidente de la Nación- en el refrendo del Convenio suscripto”.

En particular, en cuanto a si la situación que se presenta en la renegociación que nos ocupa implica o no la configuración de alguno de los supuestos de conflicto de intereses previstos en el Capítulo V de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, consideró que:

a) No se corresponde con el conflicto de intereses señalado en el artículo 13, inciso a)[1] de dicha norma, *“...ya que el señor Presidente de la Nación no dirige, administra, representa, patrocina o asesora ni presta servicios de ninguna forma a la empresa AUSOL S.A.”*.

b) *“En el caso, al momento de iniciarse el procedimiento bajo análisis, ni el señor Presidente de la Nación ni miembros de su familia eran socios de la empresa AUSOL S.A., ni de sus socias, por lo que la situación no encuadraría en la hipótesis prevista en el artículo 13 inciso b)[2] de la Ley 25.188”*.

c) La hipótesis del artículo 14[3] de la Ley N° 25.188 *“...está dirigida a regular la situación de funcionarios que han tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, prohibiéndoles actuar en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, dentro de los TRES (3) años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado”*.

Al respecto, consideró la OA que *“...en los antecedentes sometidos a consulta no se advierte la configuración de ninguno de esos presupuestos fácticos”*.

d) *“No surge de las constancias obrantes en estas actuaciones que el Sr. Presidente de la Nación se encuentre alcanzado por el deber de abstención del artículo 15 inciso b)[4] de la Ley 25.188, toda vez que no ha prestado servicios a la empresa AUSOL S.A. ni a las empresas que la integran como socios en los últimos tres (3) años. Ello sin perjuicio del deber de abstención previsto en el artículo 4° inciso d) del Decreto 202/17 (...) o –eventualmente- por aplicación del artículo 2 inciso i) de la Ley 25.188 que remite a las causas de excusación de la legislación civil...”*.

e) Con relación a los deberes de excusación previstos en el artículo 2°, inciso i)[5] de la Ley N° 25.188, consideró la OA que *“...las causas de excusación mencionadas alcanzaban –en todo caso y de considerarse configuradas- al señor Presidente de la Nación mientras sus familiares participaron en AUSOL S.A., por medio de SOCMA AMERICANA S.A. y SIDECO AMERICANA S.A., conforme los antecedentes bajo análisis”*.

En base a dichos antecedentes, destacó que *“...toda vez que hasta la salida de SIDECO AMERICANA S.A. de su participación en AUSOL S.A. e incluso hasta la actualidad, no se ha cumplimentado la etapa del procedimiento que requiere la firma del acuerdo integral de renegociación contractual “ad referéndum” del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el señor Presidente de la Nación no ha tomado intervención en el caso”*.

No obstante, puso de resalto que *“...el Decreto 202/17 establece un nuevo supuesto de abstención –el que sería de aplicación a este caso en concreto- previsto en el artículo 4 inciso d), aún en el caso como el presente donde no se ha configurado una situación de conflicto de intereses”*.

Como corolario de lo expuesto, la OA recomendó, en lo sustancial, hacer saber a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y al MINISTERIO DE TRANSPORTE *“...que el Ing. Mauricio Macri debe abstenerse de tomar intervención en la firma Ad Referendum del contrato de renegociación que tramita por el expediente de referencia, en cumplimiento del artículo 4° inciso d) del Decreto 202/17”*.

Órdenes Nros. 6 y 7: La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD del MINISTERIO DE TRANSPORTE (desde aquí, DNV) efectuó diversas consideraciones respecto al contenido de la Declaración Jurada presentada por AUSOL, en relación a la vinculación con el Presidente de la Nación, en cumplimiento de lo normado por el artículo 4°, inciso a) del Decreto N° 202/17.

Asimismo, informó que se cargarán en la página web oficial de la DNV las actuaciones referidas al procedimiento de renegociación contractual, dando cumplimiento al artículo 4°, inciso b) de la norma citada.

Con respecto a la adopción de los mecanismos normados en el artículo 4°, inciso c) del citado Decreto, consideró más adecuado la realización de la audiencia pública, realizada de “*manera sincronizada y armónica*” con las previsiones del Decreto N° 367/16.

Orden N° 8: Acta Acuerdo sobre Inicio de Trámite de Aprobación del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte, por la cual se ha dado inicio al trámite establecido en el artículo 4° del Decreto N° 367/16, con fecha 18/8/17, estipulando diversas cuestiones sobre el particular.

Orden N° 11: copia digitalizada del Expediente N° 17171/2016 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (N° 5463/2016 del registro del ex Órgano de Control de Concesiones Viales, en adelante OCCOVI), por conducto del cual tramitó el proceso de renegociación, en el marco de la Ley N° 25.561, del contrato del Acceso Norte entre AUSOL y el Estado Nacional, obrando en dichas actuaciones las intervenciones de distintas instancias técnicas, económicas y jurídicas, tanto de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, como del OCCOVI y del Concesionario.

Entre los antecedentes obrantes en las citadas actuaciones se destacan los siguientes:

- Resolución N° 886 del 4 de julio de 2016, por la cual el Director Ejecutivo del OCCOVI invitó a AUSOL a continuar las tratativas iniciadas durante 2016 con el objeto de llegar a un acuerdo integral que pudiese fin al proceso de renegociación (fs. 12/16).
- Acta Acuerdo sobre Inicio de Trámite de Aprobación del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte, suscripta el 18 de agosto de 2017 entre la DNV y AUSOL (fs. 275/277).
- Acta Acuerdo sobre Contratación de Obras y Capex Operativos Previstos en el Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte (fs. 278).
- Presentación efectuada por el Presidente de AUSOL ante la DNV a los fines de dar cumplimiento a las previsiones del Decreto N° 202/17, por el cual se encuentra obligada a presentar su Declaración Jurada de Intereses (fs. 302/305).

Allí, el presidente del Directorio de AUTOPISTAS DEL SOL S.A. manifestó, el 7/9/17 que “*A la fecha la Sociedad no se encuentra comprendida en ninguno de los supuestos de vinculación enunciados en el Decreto N° 202/2017*”.

No obstante ello, señaló que “*...el treinta con cuatro centésimos por ciento (30,04%) de las acciones de la Sociedad, se encuentra sujeto al régimen de oferta pública y cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La Sociedad no tiene los medios a su alcance para conocer si existen titulares de más del cinco por ciento (5%) de las acciones de la Sociedad sujetas a oferta pública que tengan vinculación con los funcionarios alcanzados por el Decreto N° 202/2017. Asimismo en el registro de acciones en oferta pública que lleva la Caja de Valores figuran acciones a nombre de entidades comitentes cuyos beneficiarios últimos son personas que no se encuentran individualizadas en el citado registro*”.

Sin perjuicio de lo antedicho, consignó que “*...en el Formulario se señala que, hasta el 23 de mayo de 2017, el siete por ciento (7%) del capital social de la Sociedad, que otorgaba derecho al dos con treinta y seis centésimos por ciento (2,36%) de votos en las asambleas de accionistas, era de titularidad de Sideco Americana S.A., empresa controlada por Socma Americana S.A., cuyos accionistas son personas físicas dentro del grado de consanguinidad previsto en el artículo 1° del Decreto N° 202/2017 respecto del funcionario que allí se indica*”[6].

En este mismo orden de ideas, continuó: *“El 23 de mayo de 2017 Sideco Americana S.A. transfirió la totalidad de sus acciones de la Sociedad a favor de Natal Inversiones S.A. (empresa que, según la información que ésta brindara a la Dirección Nacional de Vialidad, no se encuentra alcanzada por ninguno de los supuestos de vinculación enunciados en el Decreto N° 202/2017). Dicha transferencia accionaria fue oportunamente aprobada...”*.

Finalmente, aclaró que *“...desde el año 2001 que Sideco Americana S.A. no ha tenido representación en el directorio de la Sociedad, ni estuvo presente en ninguna de sus asambleas de accionistas en ese lapso”*.

Orden N° 15: intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (desde aquí, SIGEN) en los términos del artículo 4° del Decreto N° 367/16, señalando que su pronunciamiento se circunscribe a verificar que las actuaciones dispongan de la información necesaria que permita dar sustento a la toma de decisiones que le competen a cada nivel interviniente y el cumplimiento de los procedimientos propios del trámite, sin perjuicio de efectuar algunas recomendaciones y consideraciones.

Orden N° 36: En la órbita de la DNV se efectuó un análisis del Acuerdo de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte aprobado por el Decreto N° 296/06, sus respectivas adecuaciones y del desequilibrio del Plan Económico Financiero (PEF) de la concesionaria.

Así, se estimaron los importes que reequilibraban la ecuación económica – financiera de la concesión del Acceso Norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calculando:

- Monto compensatorio que devuelva la Tasa Interna de Retorno (TIR).
- Inversión No Amortizada hasta diciembre de 2016.
- Ingresos que dejó de percibir la concesionaria por la pesificación de tarifas hasta el 31 de diciembre de 2016.

Asimismo, se acompañó como archivo embebido copia de la Resolución OCCOVI N° 444/02, por la cual se aprobaron las inversiones efectuadas por la concesionaria al 31 de diciembre de 2001.

Orden N° 40: intervención de la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la DNV, manifestando que algunas de las observaciones y recomendaciones formuladas por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN y la SIGEN habrían sido receptadas e incorporadas al texto del proyecto de Acuerdo Integral.

Asimismo, entendió que se ha dado cumplimiento con el marco del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual con AUSOL, con la realización de la Audiencia Pública a fin de posibilitar la participación ciudadana conforme lo establece el artículo 5° del Decreto N° 367/16.

Además, informó que dicha repartición es la Autoridad Administrativa competente para la suscripción del proyecto bajo estudio, *“en cumplimiento de lo prescripto por el Apartado 16.2 del Acuerdo de Renegociación Contractual del Acceso Norte, por el Decreto – ley N° 505/58, ratificado por Ley N° 14.467, y en virtud del Decreto N° 27/18”* y que, con la suscripción y posterior ratificación por el Poder Ejecutivo Nacional se estaría dando cumplimiento a las previsiones contenidas en el Decreto N° 367/16, así como también a lo previsto por la Cláusula Séptima del Acuerdo de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Corredor Acceso Norte –Decreto N° 296/06-, el cual dispone que *“[p]ara la entrada en vigencia del nuevo ACUERDO a que se arribe en dicha instancia, se deberá cumplir con los procedimientos establecidos legalmente y la aprobación del PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN)”*.

Orden N° 42: Tercera Acta Complementaria sobre Modificaciones al Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte, en la cual las partes acordaron adoptar una nueva versión del Acuerdo Integral, el cual se adjuntó como Anexo, al sólo efecto identificatorio y sin expresar

consentimiento, el que sólo se considerará otorgado cuando el Acuerdo Integral haya sido firmado por el Concesionario y por los Ministros de Transporte y Hacienda una vez cumplidos los trámites pertinentes previstos en el Decreto N° 367/16, y será efectivo cuando haya entrado en vigencia de conformidad con la cláusula 18.1 de dicho Acuerdo Integral. Agregando, además, que durante dicho trámite y antes de la firma del Acuerdo Integral, las Partes podrán ajustar o actualizar sus Anexos, tomando en cuenta la fecha proyectada de entrada en vigencia del Acuerdo Integral y la evolución de las variables económicas relevantes operadas.

Orden N° 43: Informe Evaluativo del Acuerdo, elaborado por la DNV, concluyendo que el objetivo de la renegociación es *“restablecer el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión y la ejecución de obras e inversiones fundamentales para el desarrollo vial del Gran Buenos Aires y la optimización del servicio prestado por el Concesionario”*, y que, *“[m]erced a la extensión del plazo de la Concesión, se posibilita el inicio inmediato por parte del Concesionario de la ejecución de las obras”*.

Atento ello, informó que es opinión de la DNV que *“la celebración del Acuerdo Integral y su aprobación definitiva por el Poder Ejecutivo Nacional constituye una medida que brinda adecuado cumplimiento a la legislación aplicable y a los compromisos asumidos previamente por el Estado Nacional, en términos y condiciones razonables y convenientes para el interés público”*.

Orden N° 48: intervención de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en la que se señaló que, en cuanto a la cuestión de la suscripción por parte del PODER EJECUTIVO, se deberá tener en cuenta la recomendación realizada por la OA.

Finalmente, concluyó que, cumplidas las observaciones allí formuladas, no existirían reparos jurídicos que oponer a la suscripción del Acuerdo Integral.

No obstante, destacó que *“...deberá observarse, al momento de la suscripción del acto, que no haya ocurrido un cambio sustancial en los antecedentes de hecho o de derecho vigentes...”*.

Orden N° 59: La DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTRACTUALES, LEGISLATIVOS Y TRIBUTARIOS del MINISTERIO DE HACIENDA sostuvo que *“...la emergencia económico, administrativa, Financiera y Cambiaria declarada por la Ley N° 25.561, en cuyo marco el art. 4° del Decreto N° 367/16 preveía la suscripción por el actual Ministerio de Hacienda de los acuerdos integrales de renegociación contractual que se celebren conjuntamente con los ministerios en cuya órbita se encuentran los contratos sujetos a renegociación, Ad Referéndum del PODER EJECUTIVO NACIONAL, no fue prorrogada”*.

Orden N° 62: intervención de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE solicitando la opinión de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.

Orden N° 66: La SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE HACIENDA indicó que en tanto la renegociación bajo examen exceda el alcance de la conclusión de una renegociación basada en la ley 25.561 se entiende que [esa] cartera carecería de competencia para participar por tratarse de un contrato ajeno a su órbita.

Orden N° 68: Dictamen de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, por el cual se expidió con relación a los aspectos formales del proceso de renegociación del contrato, así como también respecto del nuevo texto del Acuerdo Integral obrante en el Orden N° 39.

Orden N° 74: nueva versión del Proyecto de *ACUERDO INTEGRAL DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL ACCESO NORTE*.

Orden N° 75: La GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD se expidió sobre las observaciones y sugerencias formuladas tanto por el servicio jurídico del MINISTERIO DE TRANSPORTE como por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en sus respectivas intervenciones.

Orden N° 76: Cuarta Acta Complementaria sobre Modificaciones al Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte, suscripta el 19 de junio de 2018 entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y AUTOPISTAS DEL SOL S.A., por la que las Partes adoptaron una nueva versión del Acuerdo Integral, al sólo efecto identificatorio y sin expresar consentimiento, el que sólo se considerará otorgado cuando el Acuerdo Integral haya sido firmado por el Concesionario y por el Ministro de Transporte, y será efectivo cuando haya entrado en vigencia de conformidad con lo previsto en la Cláusula 18.1 de dicho Acuerdo Integral.

Orden N° 80: intervención de la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD expuso las razones por las que ha mantenido la redacción de las cláusulas 16 y 9.3 del Acuerdo Integral propiciado.

Orden N° 83: proyecto de decreto descripto en el Título I del presente dictamen.

Orden N° 84: intervención de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Orden N° 88: copia certificadas de actas notariales de las que surge, en lo sustancial, la elección de autoridades de la sociedad, reformas estatutarias y reducción del capital social, y –finalmente- la asamblea de accionistas en la que se resolvió aprobar la firma del Acuerdo Integral y la documentación relacionada al mismo en los términos, condiciones y alcances allí analizados, facultando al presidente y/o vicepresidente de la sociedad para que procedan a suscribir la totalidad de la documentación que sea necesaria a tales fines con más los ajustes al texto que surjan de la finalización del trámite aprobatorio en sede administrativa en tanto y en cuanto dichos ajustes no desvirtúen la esencia de los aspectos comentados en ese acto asambleario.

Orden N° 89: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE manifestó que han sido receptadas las observaciones efectuadas por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN y por el servicio jurídico permanente de aquella jurisdicción.

Orden N° 90: Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte suscripto el 26/6/18 entre el ESTADO NACIONAL –representado por el señor Ministro de Transporte- y la concesionaria AUSOL, representada por su presidente.

Orden N° 91: Anexos I a XVIII de dicho Acuerdo.

Orden N° 92: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE giró las actuaciones a esta SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a efectos de que se tome intervención.

- III -

CONSIDERACIONES

1.- Como se adelantara, se propicia la aprobación del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscripto por el MINISTERIO DE TRANSPORTE y AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

Sobre el particular, cabe recordar que a través del Decreto N° 1167/94 se otorgó a la empresa GRUPO CONCESIONARIO DEL SOL S.A. la Concesión del ACCESO NORTE de acuerdo a los términos del contrato suscripto con dicha empresa, en el marco de las Leyes N° 23.696 de Reforma del Estado y N°

Conforme el informe técnico producido en el ámbito de la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD en el Orden N° 36, se trata de un contrato de obra pública de tipo “gratuito”, esto significa que el concesionario no recibe aportes, subsidios, avales ni garantías por parte del Estado. La obra se financia mediante el cobro de peaje con tarifa tope, o sea que las variaciones en el costo de construcción de las obras, los niveles de tránsito y demás variables y parámetros que componen el Plan Económico Financiero (PEF) forman parte del riesgo empresario. Las tarifas estaban expresadas en dólares estadounidenses convertibles en pesos a la tasa de cambio fijada por el Banco de la Nación Argentina, y se redeterminaban anualmente de acuerdo con la variación del Índice de Costo de Vida publicado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Ahora bien, en virtud de la crisis que afectara al país a fines del 2001, mediante la Ley N° 25.561 se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades necesarias para adoptar las medidas que permitan conjurar la crítica situación de emergencia.

Así, se establece que en los contratos de servicios públicos quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar y los mecanismos indexatorios (artículo 8° de la Ley N° 25.561), autorizando al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos de obras y servicios públicos.

A fin de cumplimentar el mandato conferido, por Decreto N° 296/06 se ratificó el ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL (ARC) suscripto por la ex UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y la Empresa Concesionaria AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

Durante la vigencia del Acuerdo de Renegociación aludido precedentemente, se informa en el aludido Informe Técnico obrante en el Orden N° 36 se aplicaron parcialmente las cláusulas relativas a la recomposición de la ecuación económica financiera del Contrato de Concesión generando un desequilibrio, agregando que “...si bien a partir del ARC se aprobaron sucesivos cuadros tarifarios para compensar parcialmente el desequilibrio aludido y previo el reconocimiento de la futura incidencia de las variaciones de precios, según lo previsto en su Cláusula Octava, sin embargo, cada nuevo cuadro no se aplicó totalmente ni a todas las categorías de vehículos y la incidencia referida fue admitida en forma tardía y parcial.

Como consecuencia de lo expuesto, y en atención a lo previsto en la Ley N° 25.561 y en el ARC, se recompuso parcialmente la ecuación económica-financiera original del CONTRATO DE CONCESIÓN”.

A los efectos de concluir los procesos de renegociación de los contratos de Obras y Servicios Públicos dispuestos por el artículo 9° de la Ley N° 25.561, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dispuso, por Decreto N° 367/16, instruir a los Ministerios a cuyas órbitas correspondan los respectivos contratos sujetos a renegociación, a proseguir los procedimientos que se encontraran en trámite de sustanciación en el ámbito de la ex UNIREN (artículo 2°).

En forma concordante, se facultó a los Ministerios competentes en forma conjunta con el entonces MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS a suscribir acuerdos parciales de renegociación contractual y adecuaciones transitorias de precios y tarifas que resulten necesarios para garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios respectivos hasta la suscripción de los acuerdos integrales de renegociación contractual, los que se efectuarán a cuenta de lo que resulte de la Revisión Tarifaria Integral (artículo 3° del Decreto N° 367/16).

El procedimiento previsto por el citado Decreto N° 367/16 ordena que los acuerdos integrales de renegociación contractual, luego de la intervención del órgano de regulación y control que en cada caso corresponda, serán enviados a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN para su intervención y sometidos a consideración de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previo a su firma por el

Ministro con competencia específica en función de la materia en forma conjunta con el ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, la que se efectuará *ad referendum* del PODER EJECUTIVO NACIONAL (artículo 4°).

2.- En lo sustancial, el ACUERDO INTEGRAL que se propicia aprobar cuenta con una parte introductoria que comprende las consideraciones y antecedentes del caso, indicándose que “...*el concesionario limita sus pretensiones a la recuperación de lo invertido y no amortizado, cuyo valor, además, ha aceptado, todo ello sujeto a los términos del presente, reducir de una suma que, a la FECHA DE INICIACIÓN DEL TRÁMITE (...), estima en la suma de novecientos noventa y cinco millones de DÓLARES (...) (US\$ 995 millones) que arroja el Registro de Inversiones llevado por el CONCESIONARIO e informado oportunamente al OCCOVI, a la cifra, acordada con el concedente, de quinientos cuarenta millones quinientos veintidós mil doscientos sesenta y nueve con cincuenta y dos centésimas de DÓLARES (US\$ 540.522.269,52) a la ENTRADA EN VIGENCIA (...), renunciando asimismo, sujeto a los términos del presente, a reclamar un mayor resarcimiento por el incumplimiento de CONTRATO DE CONCESIÓN y del ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL*”.

Seguidamente, el articulado se encuentra estructurado de la siguiente forma:

- El artículo PRIMERO establece el *Glosario*.
- El artículo SEGUNDO prevé que el *OBJETO* del Acuerdo es concluir la instancia de Revisión del Contrato de Concesión, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Séptima del Acuerdo de Renegociación Contractual ratificado por el Decreto N° 296/06.

En rigor, concluye, extiende y regula las obligaciones para las partes durante dicha extensión, con lo cual prevé tener en consideración a modo de complemento necesario, pautas acordadas con anterioridad, que se mantienen vigentes.

En tal sentido, conforme la definición al término CONTRATO DE CONCESIÓN, a partir de la entrada en vigencia del ACUERDO INTEGRAL, “... *el término CONTRATO DE CONCESIÓN comprenderá (i) el TEXTO CONTRACTUAL ORIGINARIO; (ii) las ADECUACIONES CONTRACTUALES; (iii) las modificaciones introducidas por las Cláusulas 6, párrafo segundo, 9, 10 y 12 del ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL, quedando sin efecto las demás disposiciones del ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL; y (iv) el presente ACUERDO INTEGRAL*”.

- El artículo TERCERO, referido al *PLAZO DE VIGENCIA*, extiende la Concesión hasta el 31/12/30, aun cuando se prevé la posibilidad de su extinción antes de esa fecha y en oportunidad de percibir el Concesionario el total de INVERSIÓN NETA, y que no exista INVERSIÓN NO AMORTIZADA.

Este artículo prevé además una posibilidad de prórroga de la concesión una vez finalizada la extensión, regulando los diferentes rubros que el concesionario tendrá derecho a percibir durante ella.

Por último, regula las consecuencias que se derivan de un rescate.

- En el artículo CUARTO se establecen los Cuadros Tarifarios determinados en el Anexo IX, los que entrarán en vigencia de acuerdo a las previsiones del artículo DÉCIMO OCTAVO. En esta materia, se establece el procedimiento a seguir para las redeterminaciones tarifarias y actualizaciones tarifarias, contemplándose los requisitos de publicidad y el control por parte del ÓRGANO DE CONTROL.
- En el artículo QUINTO se fija un nuevo PLAN ECONÓMICO FINANCIERO que reemplaza todo lo anterior en esta materia. Como ya fuera señalado, el nuevo PLAN ECONÓMICO FINANCIERO se fija para recuperar la INVERSIÓN NETA de US\$ 499.000.000 (cuatrocientos noventa y nueve millones de dólares), a una tasa anual de recuperación del 7,69%. Allí se regula el mecanismo de compensación correspondiente.

- En el artículo SEXTO se establecen las obras y los CAPEX OPERATIVOS[8] que deberá llevar a cabo el CONCESIONARIO refiriéndose a su financiación y procedimientos a desarrollar para completar las mismas.
- Según el artículo SÉPTIMO el CONCESIONARIO deberá abrir una cuenta bancaria con el fin específico en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (CUENTA REMANENTE).
- En el artículo OCTAVO se establece el régimen de PENALIDADES y OTRAS ACTUACIONES.
- En el artículo NOVENO se prevé el control de la implementación del PLAN ECONÓMICO FINANCIERO por parte de la Autoridad de Control. Además, contempla que el CONCESIONARIO deberá presentar anualmente un informe detallado de ingresos y egresos.
- En el artículo DÉCIMO se establecen las obligaciones a cargo del Concesionario respecto de la *INFORMACIÓN AL PÚBLICO*.
- En el artículo DÉCIMO PRIMERO se obliga al Concesionario a ampliar el objeto y las condiciones de las garantías requeridas desde el comienzo de la relación entre las partes.
- En el artículo DÉCIMO SEGUNDO se prevé idéntica obligación para el Concesionario respecto de los seguros.
- En el artículo DÉCIMO TERCERO se deja sin efecto el RAE[9] para el Acceso Norte y se regula sobre el destino de los fondos recaudados hasta el 31/1/17.
- El artículo DÉCIMO CUARTO se refiere al tratamiento de los contratos del Concesionario. Entre ellos se incluye los que celebre por las ÁREAS DE SERVICIO, y le permite prorrogarlos de manera similar a la extensión que se procura otorgar.
- En el artículo DÉCIMO QUINTO se establecen las condiciones que aplican a las renunciaciones de acciones por parte del concesionario y sus accionistas.
- En el artículo DÉCIMO SEXTO se establece que: *“Todas las controversias entre las PARTES derivadas del CONTRATO DE CONCESIÓN o que guarden relación con éste, incluyendo la revisión de las sanciones que se impongan al CONCESIONARIO y de cualquier otro acto o medida que dicte el CONCEDENTE, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN o el ÓRGANO DE CONTROL, serán resueltas definitivamente mediante arbitraje, conducido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (“CCI”). La sede de arbitraje será Buenos Aires, Argentina, y se aplicará el derecho argentino”*.
- En el artículo DÉCIMO SÉPTIMO se prevén otras disposiciones aplicables en relación con cláusulas originariamente previstas en el Contrato Inicial Texto Contractual Originario.
- En el artículo DÉCIMO OCTAVO se fijan las condiciones de la ENTRADA EN VIGENCIA.
- En el artículo DECIMO NOVENO se determina que el CONCESIONARIO tendrá derecho a dar por terminado el acuerdo si se produjera un evento disruptivo y este persistiera durante dos semestres consecutivos o tres semestres alternados.
- En el artículo VIGESIMO se afirma que el acuerdo no es susceptible de la aplicación de la ley de sellos en virtud de la inmunidad fiscal de los instrumentos del Gobierno Federal celebrados en interés público general (art. 75, inc. 30, Constitución Nacional), estableciendo cómo deberá ser computado cualquier monto que deba pagarse por tal concepto.

3.- Conforme lo exige el artículo 4° del Decreto N° 367/16 tomaron intervención la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en los Órdenes Nros. 4 y 68, como así también la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN en el Orden N° 15.

En forma preliminar, es importante mencionar los criterios señalados por ese Alto Organismo Asesor en el Orden N° 4, los cuales resultan de aplicación obligatoria a este servicio de asesoramiento (conf. artículos 6° de la Ley N° 12.954 y 4° de su Decreto Reglamentario N° 34.952/47), en cuanto destaca que el asesoramiento se limita a los aspectos jurídicos de las cuestiones que han sido sometidas a estudio, de modo que esta Dirección General no se expedirá sobre sus contenidos técnicos o económicos, ni sobre las cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia de las formulas contractuales que se han propuesto.

En tal sentido, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN tiene dicho que no entra a considerar

los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por resultar ello ajeno a su competencia. Su función asesora se encuentra restringida al análisis de las cuestiones de derecho y su aplicación al caso concreto, quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas a la autoridad administrativa con competencia en la materia (v. Dictámenes 245:359, 245:381 y 297:79). Asimismo, destacó que “...excede la esfera de sus atribuciones abrir juicio sobre las cuestiones de carácter técnico-económico que otorgan fundamentos a los proyectos que se ponen a su consideración, máxime si han sido objeto de análisis por las oficinas técnicas con competencia específica (v. Dictámenes 244:466, 244:468 244:854 y 297:79)”.

También puso de resalto que las cuestiones técnico-económicas que subyacen al consenso alcanzado entre las partes, han sido producto de una negociación llevada adelante en el ámbito de los organismos técnicos específicos (la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y el ex OCCOVI) tal cual surge del expediente, resultando igualmente ajeno ponderar dicho proceso negociador (v. Dictámenes 297:79), dado que está fuera de su competencia expedirse sobre las razones de oportunidad, por exceder el marco de su incumbencia estrictamente jurídica (Dictámenes 204:90 y 159; 254:197; 254:482 y 297:79, entre otros).

En tal contexto, el presente asesoramiento se ceñirá estrictamente a los aspectos jurídicos de las cuestiones planteadas de conformidad con las líneas interpretativas y los criterios sentados por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN que se ha expedido específicamente en el caso que nos ocupa en los **Órdenes Nros. 4 y 68**.

4.- Manifestado lo anterior, se pone de resalto lo señalado por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN en cuanto verificó que las actuaciones disponen de la información necesaria que coadyuva a dar sustento a la toma de decisiones que le competen a cada nivel interviniente, habida cuenta que obran en las actuaciones las intervenciones de distintas instancias técnicas, económicas y jurídicas tanto de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, como del ex OCCOVI y del Concesionario.

Con lo expuesto, entendió que se dio cumplimiento a su intervención requerida en el artículo 4° del Decreto N° 367/16, habiendo verificado el cumplimiento de los procedimientos propios del trámite.

A su turno, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en el **Orden N° 68** destacó que la renegociación ha sido llevada a cabo por las áreas técnicas competentes (ex OCCOVI y la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD) y el MINISTERIO DE TRANSPORTE encontrándose en la etapa final de aprobación del acuerdo por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL, concluyendo, en principio, que no existirían impedimentos legales que limiten la potestad del Poder Ejecutivo para suscribir el acuerdo que se ha negociado y así poner fin a todas las controversias vigentes entre la concesionaria y sus accionistas; velar por su adecuada ejecución y satisfacer, simultáneamente, las necesidades de servicio de los usuarios de la autovía.

Llegado a este punto, merece mencionarse en cuanto al procedimiento previsto por el Decreto N° 367/16, que el MINISTERIO DE HACIENDA consideró que esa cartera carece de competencia para participar de la renegociación en trámite habida cuenta que la Ley N° 25.561 no fue prorrogada (**Órdenes Nros. 59 y 66**).

La cuestión precitada fue materia de pronunciamiento por parte de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN considerando que el Presidente de la Nación puede legalmente apartarse del procedimiento que diseñó a través del Decreto N° 367/16, dando lugar a un nuevo procedimiento, en tanto lo considerase oportuno, en virtud de los siguientes fundamentos:

“Como lógico corolario de la modificación normativa que impuso el legislador al dictar Ley de Emergencia N.º 25.561, el Poder Ejecutivo Nacional fue autorizado, mediante el artículo 9.º, a renegociar los contratos de obras y servicios públicos comprendidos en el artículo 8.º de esa ley, partiendo desde la previsión que dispuso dejar sin efecto las cláusulas de ajuste en dólares estadounidenses o en otra moneda extranjera y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro

mecanismo indexatorio, lo que derivó en la pesificación de los precios y las tarifas resultantes de dichas cláusulas.

El legislador oportunamente aclaró y facultó al Poder Ejecutivo a conducir los procesos de renegociación, sin hallarse limitado o condicionado ... por las estipulaciones contenidas en los marcos regulatorios que rigen los contratos de concesión o licencia de los respectivos servicios públicos... que sean de entidad legislativa y de alcance general (v. art. 2° de la Ley N.° 25.790, B.O. 22-10-03-).

(...) Las cláusulas y condiciones pactadas en el Contrato de Concesión oportunamente suscripto entre el Estado Nacional y AUSOL, fueron sustancialmente modificadas por tal evento y, en razón de ello, el instrumento contractual quedó sometido a la renegociación, que condujo a un primer Acuerdo del año 2006 (v. Decreto N.° 296/06), que por haber sido sólo parcialmente ejecutado, derivó en los reclamos de la concesionaria y sus accionistas. El proyecto de ACUERDO que tengo a la vista pretende finiquitar esa controversia resguardando –al mismo tiempo- la calidad y mejora continua del servicio que se presta a los usuarios.

(...) La circunstancia de que no se haya prorrogado la situación de Emergencia dispuesta por la Ley N.° 25.561 más allá del 31 de diciembre de 2017, no impide al Poder Ejecutivo Nacional finalizar el proceso de renegociación iniciado para reajustar las condiciones que se vieron afectadas por las disposiciones de esa Ley y sus normas modificatorias y complementarias.

Ello así teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo Nacional posee competencias propias no sólo para celebrar contratos administrativos sino también para proceder a su renegociación como una consecuencia de su condición de Jefe de la Administración General del país, prevista en el artículo 99 inciso 1° de la Constitución Nacional.

Tal como lo ha recordado la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte, esta Casa expresó que teniendo en cuenta la potestad de la Administración de rescindir los contratos ... debe reconocérsele también la atribución menor a aquélla de proceder a su renegociación, por aplicación del principio que reza que al que le es lícito lo más no debe serle ilícito lo que es menos (v. Dictámenes 245:367).

El sustento fáctico para proceder a la reformulación del contrato resultaría razonable, en tanto como quedó explicitado en el proyecto del ACUERDO, la Ley de Emergencia dejó sin efecto las cláusulas del referido Contrato de Concesión que establecían el valor de la tarifa básica en dólares y su actualización por el índice de precios al consumidor, así como la conversión a pesos del monto resultante para su cobro a los usuarios (...). La renegociación del año 2006, al no ejecutarse en su totalidad, frustró los términos de adecuación allí proyectados, dando lugar a reclamos y a la necesidad de una nueva renegociación.

A su vez, el marco regulatorio que rige las concesiones para la construcción, reparación, administración y explotación de la red de accesos a la Ciudad de Buenos Aires, no deviene de una norma de rango legislativo, sino que ha sido aprobado por vía reglamentaria (v. Reglamento Administrativo Regulatorio de las prestaciones, la fiscalización y control y la protección al usuario y a los bienes del Estado -MARCO REGULATORIO- de las Concesiones de Obra Pública a otorgarse bajo el régimen de la Ley N° 17.520..., respecto de los accesos que integran la RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES aprobado por Dto. N.° 1994/93 –B.O. 30-9-93).

Dicha circunstancia reafirma que el Poder Ejecutivo no necesita requerir aprobación o autorización del Congreso de la Nación para renegociar y finiquitar la adecuación que comenzó al modificarse el contrato por intermedio de la Ley de emergencia N° 25.561, del año 2002.

La Dirección Nacional de Vialidad en su informe obrante en el orden 38, aclara que el objetivo principal de la renegociación plasmada en el ACUERDO es el de ... reestablecer el equilibrio económico financiero de ese Contrato de Concesión, y la ejecución de obras e inversiones fundamentales para el desarrollo vial del Gran Buenos Aires y la optimización del servicio prestado por el Concesionario. Su aprobación por

parte del Poder Ejecutivo Nacional ...constituye una medida que brinda adecuado cumplimiento a la legislación aplicable y a los compromisos asumidos previamente por el Estado Nacional, en términos y condiciones razonables y convenientes para el interés público (el subrayado no está en el original).

Las razones expuestas por las áreas técnicas y los reclamos vigentes, permiten sostener que, en la actualidad, el Poder Ejecutivo Nacional puede apartarse de los parámetros contractuales del Acuerdo ratificado por el Decreto N.º 296/06. Éste, parcialmente ejecutado, motiva que el Estado Argentino se encuentre litigando en el ámbito internacional con los accionistas de la concesionaria, enfrentando reclamos por hechos acaecidos antes del 2006.

(...) El Poder Ejecutivo era competente para dictar el Decreto N.º 367/16 por el que estableció un procedimiento especial de renegociación de los contratos, bajo el cual las funciones vinculadas a dichas renegociaciones se asignaron a los respectivos Ministerios afines a sus materias; y también dispuso la participación del actual Ministerio de Hacienda, de la SIGEN y de esta Procuración del Tesoro de la Nación, como instancias de asistencia y control previo del referido trámite.

En razón de que el mencionado decreto fue dictado en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99, inciso 1º de la CONSTITUCIÓN NACIONAL (último párr. del Considerando del Dto.), se estima que la finalización de la emergencia no extinguió el diseño procedimental previsto, el que bien puede ser aplicado para que, en el proceso de reajuste contractual que culmine con el acuerdo que celebre el Poder Ejecutivo Nacional, cuente con las opiniones previas de los organismos con injerencia en esta materia.

Esta perspectiva también habilita a sostener que el Poder Ejecutivo puede modificar o apartarse desde ahora del procedimiento interno por él diseñado para regir durante la emergencia, si así lo considerase conveniente. Tal decisión no merecería, para esta Casa, reproche legal alguno.

Esta conclusión que se propicia, es la que más se adecúa a las múltiples y complejas tratativas que implica llevar a cabo todo proceso de renegociación y que, en el presente caso, como se ha podido observar, el trámite estaría muy avanzado y próximo a concluir”.

De tal manera, en el marco de los criterios expuestos ut supra ese Alto Organismo analizó los términos del nuevo texto del Acuerdo Integral, habida cuenta que el mismo había sido actualizado en virtud de las observaciones y sugerencias formuladas, tanto por PTN en su primera intervención como por la SIGEN.

En virtud de ello, se expidió respecto a si el nuevo texto de acuerdo fue readecuado de acuerdo a las observaciones que realizó en su anterior intervención.

*A tal efecto, recordó “...que los puntos destacados en aquel asesoramiento, se relacionaban con: a) la manera en que se regulaba la debida **participación de los usuarios** frente a cada redeterminación anual de tarifa y/o las adecuaciones parciales; b) las limitaciones para ejercer los **controles tarifarios** y de otra índole; c) la manera de resolver los conflictos por la **vía arbitral** y d) el condicionamiento que se incorpora a las **renuncias del concesionario y sus accionistas**.*

En tal sentido, señaló que “El Considerando del ACTA COMPLEMENTARIA da cuenta de los cambios que han sido incorporados en la nueva versión del ACUERDO con el objeto de armonizar su texto con lo apuntado por este Organismo Asesor (y por la SIGEN).

*(...) se expresa que la primera de las cuestiones (participación de los usuarios en el proceso de redeterminación tarifaria) ha sido superada con la nueva redacción de la Cláusula 4.6. del ACUERDO que garantiza, dados los supuestos allí detallados, esa instancia de debate público para las redeterminaciones tarifarias anuales; **lo que efectivamente ocurre en la actual redacción.***

*También en este aspecto, se ha brindado la explicación que justifica el diferente tratamiento en materia de actualización tarifaria mediante el CER, a los supuestos de usuarios con TELEPASE y a los que efectúan el pago en forma manual, **aspecto que anteriormente no había sido aclarado.***

(...) En cuanto a la segunda de las cuestiones (controles tarifarios y de otra índole), el ACTA da cuenta de que en la nueva versión del ACUERDO, la Dirección Nacional de Vialidad, en carácter de órgano de control sucesor del OCCOVI, efectivamente mantiene atribuciones de control sobre la actividad del concesionario, lo que se ve reflejado, a título de ejemplo, en la Cláusula 9.3 del ACUERDO.

No obstante, sin perjuicio del control anual respecto de las determinaciones, redeterminaciones y actualizaciones tarifarias previsto en el inciso b de la Cláusula 9.3 del ACUERDO, el nuevo texto **mantiene las limitaciones** que tenía la versión anterior, en cuanto al tiempo para ejercer el control tarifario y a las razones que darían lugar a la intervención del citado Órgano de Control (v. Cláusula 4.3.d del ACUERDO); por lo que, en este aspecto, **sostengo mi anterior opinión respecto a dichas limitaciones**.

(...) En relación con las tercera de las cuestiones (solución de conflictos por la vía arbitral) observo que en la nueva versión del ACUERDO se prevé –al igual que en la versión anterior– que cualquier controversia que pudiera surgir entre las partes, será sometida y resuelta en un arbitraje conforme con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Argentina y aplicación del derecho argentino (v. Cláusula 16).

El nuevo texto, introduce además la Cláusula 19, que regula una causal de rescisión asociada a un supuesto de incumplimiento específico y grave, denominado Evento Disruptivo, y que se configuraría si por una medida pública las tarifas resultan inferiores a las previstas en el ACUERDO, en determinada proporción y por determinado período. Y en este supuesto, se estipula que, a opción del concesionario, las controversias derivadas de esta cláusula sean sometidas al arbitraje local regulado en la citada Cláusula 16, o bien, a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), lo que supone una prórroga de jurisdicción que exige una ley que lo autorice como condición de validez.

Independientemente de que dicha posibilidad responda a prácticas arbitrales habituales, y que han sido receptadas por el régimen de los Contratos de Participación Público Privadas (Ley N.º 27.328 y su reglamentación), lo cierto es que, en ese nuevo régimen de contrataciones, la exigencia legal que lo habilita está satisfecha por la propia ley que regula esa forma de contratar; **extremo ausente en el caso sujeto a análisis**.

Por tal motivo, **sin perjuicio de mantener mi anterior observación** en cuanto a las consecuencias que podrían derivarse del actual (y anterior) método de solución de controversias y de designación de árbitros –particularmente en lo relacionado con la determinación tarifaria–, **encuentro un obstáculo de mayor relevancia** en la posibilidad de sujetar las controversias a que refiere la Cláusula 19 a un arbitraje ante el CIADI sin la pertinente habilitación legal.

(...) En cuanto a la cuarta cuestión (condicionamiento a las renunciaciones del concesionario y sus accionistas), el ACTA COMPLEMENTARIA refiere a que con las modificaciones introducidas a los incisos a) y b) de la Cláusula 15.6 del ACUERDO se preserva el carácter novatorio del ACUERDO y el efecto definitivo de las renunciaciones y desistimientos allí regulados.

Sin embargo, la actual versión del ACUERDO mantiene una cláusula similar a su anterior 15.6, inciso c) que, frente a una medida pública que afecte o condicione la vigencia del ACUERDO, le otorga la facultad del concesionario y sus accionistas de reclamar bajo el derecho local o internacional **sus derechos preexistentes a la entrada en vigencia del ACUERDO, sin limitación alguna proveniente de su firma** (v. actual Cláusula 15.6.c), por lo que pese a lo expresado en el ACTA COMPLEMENTARIA, **reitero mi anterior objeción en este aspecto**”.

En virtud de lo observado por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, a través de la CUARTA ACTA COMPLEMENTARIA se adoptó un nuevo texto del Acuerdo Integral respecto del cual la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD en el **Orden N° 75** advirtió que en el texto del artículo 19.5 se eliminó la opción de la

concesionaria de acudir, en los supuestos de controversia que pudieran surgir o se relacionen con el artículo 19 del Acuerdo Integral, a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Así, destacó que de acuerdo al texto modificado esa opción se mantendría únicamente para los accionistas extranjeros del concesionario –cuya definición se incorporó al glosario del nuevo texto de Acuerdo Integral propiciado- en los términos de la cláusula 19.5 del Acuerdo Integral.

En ese sentido, consignó que “...el nuevo texto elimina todas aquellas consideraciones respecto a las cuales el Concesionario como sus accionistas podían reclamar bajo el derecho local como internacional sus derechos preexistentes sin limitación alguna, tal como fuera propuesto por la Procuración del Tesoro de la Nación, manteniéndose únicamente dicha posibilidad para el caso que el Acuerdo Integral no entrase en vigor.

En cuanto a al artículo 19.5, esencialmente se ha eliminado las consideraciones que en el anterior texto establecían la facultad del Concesionario de reclamar ante el CIADI, circunstancia también alertada por la Procuración del Tesoro”.

Posteriormente, dicho servicio jurídico tomó intervención en el **Orden N° 80**, oportunidad en la que brindó una explicación respecto de las razones por las que ese Organismo mantuvo la redacción de las cláusulas 16 y 9.3 del Acuerdo Integral en los siguientes términos: “1) Respecto al art. 16 del acuerdo, se establece que todas las controversias entre las Partes derivadas del Contrato de Concesión o que guarden relación con éste, incluyendo las sanciones que se impongan al Concesionario y de cualquier otro acto o medida que dicte el Concedente, la Autoridad de Aplicación o el Órgano de Control, serán resueltas definitivamente mediante arbitraje, conducido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, siendo la Sede Buenos Aires y aplicándose el derecho argentino.

Sobre este punto en particular, si bien la Procuración del Tesoro ha expresado que ‘...lo pactado -dada su aparente extensión para la resolución de todo conflicto contractual o regulatorio entre las partes podría exceder los límites de la razonabilidad...’, se mantuvo la redacción original en razón de que no habría impedimento legal alguno que habilite su modificación, siendo una cuestión de oportunidad, mérito o conveniencia y de acuerdo entre partes mantener la actual redacción.

En segundo término, respecto al punto relacionado con los controles tarifarios y el tiempo para ejercerlos, también se mantiene la redacción de las cláusulas implicadas, dado que no habría limitación legal que derivara en su modificación, remarcando que son cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia y de acuerdo entre las partes involucradas. Sin perjuicio de ello, la cláusula 9.3 efectivamente mantiene amplias facultades de control sobre el Concesionario, encontrándose expresamente previsto que el ORGANO DE CONTROL realizará una revisión anual de las redeterminaciones y actualizaciones tarifarias que podrá someter a revisión de auditores profesionales que elevará a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

Asimismo, la cláusula 9.4 establece un mecanismo específico para el caso que existieran observaciones que surjan de las revisiones tarifarias aludidas”.

Por su parte, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE en el **Orden N° 84** se expidió con relación al texto del Acuerdo Integral adoptado por la CUARTA ACTA COMPLEMENTARIA y se refirió a las observaciones efectuadas por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en los siguientes términos:

- Participación de los usuarios en el proceso de redeterminación tarifaria: Consideró que la observación se encontraría cumplida, habida cuenta que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN entendió que la redacción de la Cláusula 4.6 adoptada en la Segunda Acta Complementaria garantiza la instancia de debate público para las redeterminaciones tarifarias anuales, advirtiendo ese servicio jurídico que la referida redacción se mantiene sin sufrir modificaciones en el texto de Acuerdo Integral adoptado por la Tercera Acta Complementaria sobre Modificaciones al Acuerdo Integral. Además, destacó que ese Alto Organismo agregó que también se había brindado la explicación que justifica el diferente tratamiento en materia de actualización tarifaria mediante el CER, a los

supuestos de usuarios con TELEPASE y a los que efectúan el pago en forma manual.

- Controles tarifarios y de otra índole: La PTN hizo referencia a que se mantienen las limitaciones en cuanto al tiempo para ejercer el control tarifario por parte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en carácter de órgano de control sucesor del ex OCCOVI. Con respecto a tales limitaciones, el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TRANSPORTE expresó que “*En relación a esta cuestión, la Gerencia Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad (...) reafirmó lo consignado en la Tercera Acta Complementaria, poniendo de resalto que ‘la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD mantiene amplias atribuciones de control sobre el Concesionario, lo que se vería reflejado, por ejemplo, en el artículo 9.3 del texto del Acuerdo Integral’.*”

Por su parte, (...) la citada Gerencia Ejecutiva agregó que ‘respecto al punto relacionado con los controles tarifarios y el tiempo para ejercerlos, (...) se mantiene la redacción de las cláusulas implicadas, dado que no habría limitación legal que derivara en su modificación’ (sic).

Asimismo, remarcó que tal circunstancia obedece a que ‘

Sin perjuicio de ello, la Gerencia Ejecutiva de Asuntos Jurídicos entendió que la cláusula 9.3 del Acuerdo Integral proyectado ‘y que, en ese sentido, la referida cláusula ‘

- Solución de conflicto por la vía arbitral: Con relación a la observación efectuada por la PTN respecto de la redacción de la cláusula 19.5 del Acuerdo Integral conforme la Segunda Acta Complementaria, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE sugirió que “*...se revea la redacción adoptada y se introduzcan modificaciones a los fines de que del Acuerdo Integral surja inequívocamente que la posibilidad de sujetar posibles controversias a un arbitraje ante el CIADI procede únicamente mediando la habilitación legal correspondiente, como en el caso de que un Tratado Bilateral de Inversión así lo establezca. Ello, a los fines de un cabal cumplimiento de la recomendación efectuada por la Procuración del Tesoro de la Nación, la cual comparte este órgano asesor’.*”

En lo referente a la opinión vertida por la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD en relación a lo establecido en la Cláusula 16[10] del texto del Acuerdo Integral adoptado por la Tercera Acta Complementaria, recordó que la PTN sostuvo que: “*lo pactado –dada su aparente extensión para la resolución de todo conflicto contractual o regulatorio entre las partes podría exceder los límites de la razonabilidad’.*”

Por su parte, la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la DNV indicó que “*se mantuvo la redacción original en razón de que no habría impedimento legal alguno que habilite su modificación, siendo una cuestión de oportunidad, mérito o conveniencia y de acuerdo entre partes mantener la actual redacción’.*”

Atento lo expuesto, el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE TRANSPORTE puso de resalto que el examen de lo manifestado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD excedió el análisis estrictamente jurídico de ese órgano asesor, el cual se abstiene de opinar sobre aspectos que obedecen a cuestiones de mérito, oportunidad o conveniencia, por ser ajenos a su competencia funcional (v. Dictámenes: 115:224; 159:246; 167:046; 172:036; 204:047; 206:218; 210:11; 213:105; 231:36, 59, 99 y 165; 241:312; 246:559).

- Condicionamiento a las renunciaciones del concesionario y sus accionistas: Al respecto, dicho Organismo Asesor entendió que “*la actual versión del ACUERDO mantiene una cláusula similar a su anterior 15.6, inciso c) que, frente a una medida pública que afecte o condicione la vigencia del ACUERDO, le otorga la facultad del concesionario y sus accionistas de reclamar bajo el derecho local o internacional sus derechos preexistentes a la entrada en vigencia del ACUERDO, sin limitación alguna proveniente de su firma (v. actual Cláusula 15.6.c)’*”, por lo que, “*pese a lo expresado en el ACTA COMPLEMENTARIA, reitero mi anterior objeción en este aspecto’.*”

Al respecto, señaló que la Gerencia Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la DNV manifestó que “[e]n relación con los términos en que se efectúan las renunciaciones del Concesionario y de sus accionistas’ y ‘en virtud de lo dispuesto en el nuevo texto [del] Acuerdo Integral’, se eliminaron ‘todas aquellas consideraciones respecto a las cuales el Concesionario como sus accionistas podían reclamar bajo el derecho local como internacional sus derechos preexistentes sin limitación alguna, manteniéndose únicamente dicha posibilidad para el caso que el Acuerdo Integral no entrase en vigor.

En ese sentido, la Gerencia Ejecutiva de Asuntos Jurídicos entendió que con las modificaciones efectuadas al texto del Acuerdo Integral se dio cumplimiento a lo propuesto por la Procuración del Tesoro de la Nación, limitándose las reclamaciones del Concesionario para el caso que el Acuerdo Integral no entrase en vigor.

En estos términos, este órgano asesor entiende que esta observación se encontraría cumplida”.

En este estado del trámite, en el **Orden N° 92**, la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE consideró atendidas las observaciones realizadas por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de esa jurisdicción.

Frente a ello, el titular del MINISTERIO DE TRANSPORTE y AUSOL S.A. suscribieron el ACUERDO INTEGRAL DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL ACCESO NORTE con fecha 26/6/18.

5.- Efectuado el anterior detalle de los principales antecedentes que dan lugar al dictado de la medida en cuestión, no podemos dejar de advertir que en el caso se ha expedido la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN mediante IF-2018-25797053-APN-PTN.

En tal sentido resulta necesario en primer término analizar la naturaleza jurídica del dictamen en el contexto de las actuaciones administrativas y en segundo lugar la importancia que para este órgano asesor conlleva el criterio sentado por el PROCURADOR DEL TESORO.

En tal orden de ideas se estima conveniente recordar lo que conceptualmente caracteriza en nuestra normativa la función de asesoramiento, y la naturaleza y el objeto de un dictamen.

Dice Fiorini que los dictámenes son actos preparatorios que se asientan en los tramos internos del procedimiento administrativo, que se identifican por llevar el signo común de no resolver en definitiva y se diferencian por el objeto de sus manifestaciones.

Señala también que estos actos preparatorios asesoran, pero no imponen la obligatoriedad de su opinión, puesto que el obligatorio acatamiento de los dictámenes excluiría a la autoridad competente de su facultad de decisión, y en esa forma indirecta derogarían la potestad de decisión definitiva que tiene todo órgano responsable de su competencia (Fiorini, Bartolome, Derecho Administrativo, Tomo I, Bs. As., 1976, p. 323 y ss; en el mismo sentido Bielsa, Régimen Jurídico del Acto Administrativo, Tomo II, Ed. 1964, p. 88; Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Ed. 1977, p-96, entre otros).

Por su parte, Dromi destaca que la actividad que realizan los órganos estatales en ejercicio de la función administrativa es amplia, variada y compleja, por lo que se hace necesaria la colaboración específica de los órganos de consulta, técnicos y profesionales con competencia para dar sus pareceres en los asuntos administrativos y gubernativos.

Continúa dicho autor diciendo que los dictámenes son actos jurídicos de la administración emitidos por órganos competentes, que contienen informes y opiniones técnico-jurídicas preparatorias de la voluntad administrativa.

Y prosigue sosteniendo que el dictamen es un acto jurídico unilateral de la Administración, con efectos mediatos, indirectos, reflejos. Como acto jurídico de la administración, el dictamen no obliga, en principio, al órgano ejecutivo, ni extingue o modifica una relación de derecho con efectos respecto de terceros, sino que se trata de una declaración interna, de juicio u opinión, que forma parte del procedimiento administrativo en marcha.

Afirma asimismo que el dictamen forma parte de los actos previos a la emisión de voluntad, y se integra como una etapa de carácter consultivo-deliberativo, en el proceso administrativo de conformación de la voluntad estatal (Dromi José Roberto, *Instituciones del Derecho Administrativo*, Ed. 1973, p. 305/306 y *Derecho Administrativo*, Tomo I, Ed. 1992, p. 274 y ss.).

También la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha expresado reiteradamente, que sus opiniones no tienen la fuerza persuasiva de sus argumentaciones, que pueden ser disímiles de aquellas que sobre el problema adopte en definitiva el organismo consultantes, valorando de otro modo los hechos y las normas materia de análisis (v. Dictámenes 273:182; 239:169; 242:326 y 523).

Asimismo ha señalado que sus dictámenes sólo constituyen opiniones sobre determinados problemas jurídicos de las que, en principio los órganos competentes para resolver pueden apartarse fundadamente, bajo su responsabilidad, en aquellos supuestos en que no comparten los criterios sustentados por esa Casa (v. Dictámenes 254:441 entre muchos otros).

Aclarada la naturaleza y el objeto de un dictamen, corresponde referirnos a la segunda cuestión, esto es la implicancia que el criterio del Procurador del Tesoro de la Nación, contiene para el asesoramiento que este órgano debe cumplir en las actuaciones.

Al respecto merece mencionarse que por la Ley N° 12.954 se creó el CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO (artículo 1°), estableciendo que “*Será director general del cuerpo el Procurador del Tesoro...*” (artículo 2°).

En particular, el artículo 6° de dicha norma establece que “*La Dirección General como asesora del Poder Ejecutivo y las delegaciones, compondrán las asesorías de los distintos ministerios y reparticiones, pero las delegaciones deberán supeditar su acción a las instrucciones que imparta la primera para unificar criterios...*”.

Posteriormente, dicha Ley fue reglamentada por el Decreto N° 34.952/47, en cuyo artículo 4° se dispuso que “*El Procurador del Tesoro, en su carácter de director general del Cuerpo, sienta normas de interpretación, y aplicación de las leyes y sus reglamentos, las que serán obligatorias para los abogados que conforman el Cuerpo (Art. 6° de la Ley N° 12.954)*”.

Por otra parte, el Decreto N° 1336/98 aprobó la estructura organizativa de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.

Así, de conformidad con el Anexo II de dicha norma le compete al señor Procurador del Tesoro de la Nación “*Dirigir al Cuerpo de Abogados del Estado*”, al tiempo que se incluye entre las Acciones a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES “*Supervisar los dictámenes producidos por los servicios jurídicos de la Administración Pública Nacional respecto de su adecuación a la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación*”.

Es decir que el señor Procurador del Tesoro de la Nación es el Director del Cuerpo de Abogados del Estado, compuesto por los servicios jurídicos permanentes de los organismos de la Administración Pública Nacional, que son Delegaciones de la Dirección del Cuerpo, los que están obligados a atenerse a los criterios de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en materia de aplicación e interpretación del Derecho.

Dicho de otro modo, el señor Procurador del Tesoro de la Nación, en su carácter de Director General del

Cuerpo de Abogados del Estado, que comprende a todos los organismos de asesoramiento jurídico de la Administración Nacional, sienta -en tal carácter- normas de interpretación y aplicación de las leyes y sus reglamentos, las que serán obligatorias para los abogados que forman el Cuerpo. El dictamen de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN obliga a los abogados integrantes del Cuerpo, que deben dictaminar de acuerdo con su criterio. Esa función rectora de las Direcciones de Asuntos Jurídicos que tiene el Alto Órgano Asesor cumple una función unificadora de la jurisprudencia administrativa.

En ese entendimiento, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, en su calidad de Dirección General del Cuerpo, instruye que la jurisprudencia administrativa que fluye de sus dictámenes es vinculante y obligatoria para las asesorías que componen el Cuerpo de Abogados del Estado (Conf. Dictámenes 210:225 y Dictamen N° 164/97).

En este sentido, puntualizó que *“Los servicios de asesoramiento jurídico de los distintos organismos dependen en lo técnico de la Procuración del Tesoro, por ello los dictámenes son obligatorios para las delegaciones del Cuerpo de Abogados del Estado...”* (Dictámenes 252:209).

Esta Dirección General de Asuntos Jurídicos forma parte integrante del Cuerpo de Abogados del Estado creado por la Ley N° 12.954, por lo que, en virtud de lo precedentemente expuesto, debe supeditar su acción al criterio sentado por el señor Procurador del Tesoro de la Nación, quien –en su carácter de Director General del Cuerpo- sienta normas de interpretación y aplicación de las leyes y sus reglamentos obligatorias para los abogados que forman el mismo (conf. art. 6° de la Ley N° 12.954 y art.4° de su reglamentación aprobada por el Decreto N° 34.952/47 y modif.).

En tal contexto, resultan de acatamiento obligatorio para este servicio jurídico los criterios expuestos por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en sus intervenciones obrantes en los Órdenes Nros. 4 y 68.

Por lo expuesto, esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cumplimiento de las obligaciones que le imponen el artículo 6° de la Ley N° 12.954 y el artículo 4° de su Decreto Reglamentario N° 34.952/47, se expide en sentido concordante a la opinión fijada por el señor Procurador del Tesoro de la Nación en ejercicio de su condición de Director General del Cuerpo de Abogados del Estado, recomendando al Superior tener presente sus criterios.

6.- Finalmente, cabe mencionar que, en orden a las recomendaciones formuladas por la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (ver Orden N° 5), a través del Decreto N° 596 del 26 de junio de 2018 (B.O. 27/6/18), el señor Presidente de la Nación se excusó de intervenir en relación al acuerdo de renegociación contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte entre el Estado Nacional y la concesionaria Autopistas del Sol S.A., encomendando la decisión del asunto mencionado a la señora Vicepresidenta de la Nación.

Así, por expresa manda presidencial, la medida deberá ser resuelta, y eventualmente suscripta por la señora Vicepresidenta de la Nación.

-IV-

ENCUADRE LEGAL

La señora Vicepresidenta de la Nación se encuentra facultada para el dictado del acto proyectado, en virtud de las atribuciones que le confieren al PODER EJECUTIVO NACIONAL el artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional y el Decreto N° 596 del 26 de junio de 2018.

En este sentido, corresponde que en el Considerando de encuadre legal se agregue la cita del mentado Decreto N° 596/18.

-V-

CONCLUSIÓN

De compartir el Superior el criterio expuesto, y conforme lo señalado por la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, dejamos sentada nuestra opinión en la materia como así también en relación a las facultades de la señora Vicepresidenta de la Nación para decidir en relación al acto.

En el aspecto técnico-formal, deberá estarse a lo señalado por la DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO Y DECRETOS en su Informe.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

[1] “Es incompatible con el ejercicio de la función pública: a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;”

[2] “Es incompatible con el ejercicio de la función pública: (...) b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”.

[3] **ARTICULO 14.** — Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante TRES (3) años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado.

(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 862/2001 B.O. 2/7/2001).

[4] **ARTICULO 15.** — En el caso de que al momento de su designación el funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el Artículo 13, deberá:

(...)

b) Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tengaparticipación societaria.

(Artículo sustituido por art. 2° del Decreto N° 862/2001 B.O. 2/7/2001).

[5] “Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:

(...) i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil”.

[6] En la Declaración Jurada acompañada se manifiesta tener vínculo con el señor Presidente de la Nación.

[7] **Ley N° 17.520 - Artículo 1°.-** El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obra pública por un término fijo, a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o peaje conforme a los procedimientos que fija esta ley. La concesión se hará por decreto del Poder Ejecutivo.

[8] CAPEX OPERATIVOS: Son las inversiones obligatorias de capital que el concesionario deberá realizar a partir de la entrada en vigencia en bienes de capital, instalaciones, equipos y demás conceptos que se describen en el anexo II.

[9] Recurso de Afectación Específica previsto por el Decreto N° 2322/08.

[10] **Cláusula 16 del proyecto de Acuerdo Integral:** *Todas las controversias entre las Partes derivadas del CONTRATO DE CONCESIÓN o que guarden relación con éste, incluyendo la revisión de las sanciones que se impongan al CONCESIONARIO y de cualquier otro acto o medida que dicte el CONCEDENTE, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN o el ÓRGANO DE CONTROL, serán resueltas definitivamente mediante arbitraje, conducido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (“CCI”). La sede de arbitraje será Buenos Aires, Argentina y se aplicará el derecho argentino.*